

## III. Otras disposiciones

### MINISTERIO DE JUSTICIA

**25733** *RESOLUCION de 8 de octubre de 1993, de la Dirección General de Administración Penitenciaria, por la que se da cumplimiento al despacho de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 5.ª), de la Audiencia Nacional de Madrid, en relación al recurso contencioso-administrativo número 05/0001011/1993, interpuesto por don Luis Lara Mezcuca.*

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 5.ª), de la Audiencia Nacional de Madrid, se ha interpuesto por don Luis Lara Mezcuca recurso contencioso-administrativo número 05/0001011/1993, contra resolución de 10 de abril de 1992, de la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios, desestimando petición de reconocimiento de grado personal de nivel 18.

En su virtud, esta Dirección General, en cumplimiento de despacho de la antecitada Sala, lo pone en conocimiento de los posibles interesados, por si a sus derechos conviniera la personación, en forma, en el plazo de nueve días a partir del emplazamiento, en el referido recurso contencioso-administrativo.

Madrid, 8 de octubre de 1993.—El Director general de Administración Penitenciaria, Pedro Pablo Mansilla Izquierdo.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal.

**25734** *RESOLUCION de 8 de octubre de 1993, de la Dirección General de Administración Penitenciaria, por la que se da cumplimiento al despacho de la Sala de lo Contencioso-Administración (Sección 2.ª), del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede en Valencia, en relación al recurso contencioso-administrativo número 02/0001643/1993, interpuesto por don Francisco Javier Tovar Cañas.*

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 2.ª), del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede en Valencia, se ha interpuesto por don Francisco Javier Tovar Cañas recurso contencioso-administrativo número 02/0001643/1993, contra resolución de 22 de abril de 1993, de la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios, desestimando petición de reconocimiento de grado personal.

En su virtud, esta Dirección General, en cumplimiento de despacho de la antecitada Sala, lo pone en conocimiento de los posibles interesados, por si a sus derechos conviniera la personación, en forma, en el plazo de nueve días, a partir del emplazamiento en el referido recurso contencioso-administrativo.

Madrid, 8 de octubre de 1993.—El Director general de Administración Penitenciaria, Pedro Pablo Mansilla Izquierdo.

Ilmo. Sr. Subdirector general de personal.

**25735** *RESOLUCION de 8 de octubre de 1993, de la Dirección General de Administración Penitenciaria, por la que se da cumplimiento al despacho de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 1.ª) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en relación al recurso contencioso-administrativo número 1.187/1993, interpuesto por don José Antonio García Canata.*

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 1.ª), del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, se ha inter-

puesto por don José Antonio García Canata recurso contencioso-administrativo número 1.187/1993, contra resolución de 16 de diciembre de 1992, del Secretario General de Asuntos Penitenciarios, que desestima su pretensión de que le sea aplicada la sentencia de 28 de mayo de 1992, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos.

En su virtud, esta Dirección General, en cumplimiento de despacho de la antecitada Sala, lo pone en conocimiento de los posibles interesados, por si a sus derechos conviniera la personación, en forma, en el plazo de nueve días a partir del emplazamiento, en el referido recurso contencioso-administrativo.

Madrid, 8 de octubre de 1993.—El Director general de Administración Penitenciaria, Pedro Pablo Mansilla Izquierdo.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal.

**25736** *RESOLUCION de 29 de septiembre de 1993, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de Calahorra don Carlos Higuera Serrano contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Laguardia a inscribir una escritura de elevación a público de documento privado en virtud de apelación del recurrente.*

En el recurso gubernativo interpuesto por el Notario de Calahorra don Carlos Higuera Serrano contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Laguardia a inscribir una escritura de elevación a público de documento privado en virtud de apelación del recurrente.

#### I

El 16 de agosto de 1990, ante el Notario de Calahorra don Carlos Higuera Serrano, se eleva a escritura pública el documento privado por el que don José Pagola Franco vendió a don Ramón Franco Tejada tres fincas rústicas sitas en Elvillar (Alava). Como quiera que el vendedor había fallecido comparecen en la mencionada escritura presentes o representados sus tres hijos, don Javier, don José y don Rafael Pagola Sáenz, y se hace constar mediante testimonio del Notario autorizante que la fecha del fallecimiento del primero fue la de 10 de diciembre de 1985, que otorgó su última voluntad en testamento ante el Notario don José Granda Martínez el 22 de septiembre de 1959 en el que nombraba herederos a sus tres hijos, y que la escritura de partición del difunto de 8 de agosto de 1986 aceptada por dichos herederos se había autorizado por el Notario recurrente y obra en su protocolo del que ha transcrito las anteriores circunstancias.

#### II

Presentada primera copia de la anterior escritura en el Registro de Laguardia fue calificada con nota del tenor literal siguiente: «Se suspende la toma de razón de este documento por no acreditarse la legitimación de don Javier Pagola Sáenz para el acto contenido en el mismo, mediante los correspondientes certificados de defunción, del Registro de Actos de Última Voluntad y el testamento de don José Pagola Franco. El defecto se califica de subsanable.—Laguardia, 25 de abril de 1991.—El Registrador.—Firma ilegible».

#### III

El Notario autorizante de la escritura interpuso recurso gubernativo y alegó: Que en la nota se mantiene una concepción hiperformalista del sistema sucesorio español contraria a nuestras Leyes tanto sustantivas como formales o procedimentales. Que se exige sin apoyo en disposición legal alguna una prueba tasada, negando cualquier otra para acreditar la cualidad de heredero en un acto que no es de naturaleza particional. Y ello no es así, según resulta de las normas hipotecarias, y en especial del artículo 78 del Reglamento Hipotecario para la inscripción de par-

taciones, en donde se exige respecto de los certificados de defunción y de actos del Registro de Ultima Voluntad o su presentación o relacionarlos en el título, como aquí se hace y declaró la Resolución de 15 de enero de 1960, teniendo en cuenta que el certificado del Registro de Ultimas Voluntades es meramente informativo; y en cuanto a la copia del testamento, obsérvese el artículo 76 del mismo texto legal. Si estas normas se aplican cuando se trata de inscribir un acto particional, con más razón serán extensibles al supuesto de la escritura calificada. Y queda justificado con más fuerza en nuestro caso, pues la escritura de partición de herencia acredita con mucha más seguridad que los documentos solicitados por el Registrador la cualidad de heredero, pues los llamados a la herencia en un testamento todavía no han aceptado y pueden llegar a no serlo. Por eso los documentos exigidos por el Registrador lo más que muestran es la vocación hereditaria, mientras que en la partición la cualidad de heredero resulta de forma inequívoca.

## IV

El Registrador de la propiedad en defensa de la nota alegó: Que la postura del Notario recurrente de que para acreditar la cualidad de herederos de don José Pagola Franco basta la escritura de partición contradice las normas de derecho sucesorio e hipotecario —artículos 657 a 661 y 999 del Código Civil y 14 y 20.5.º de la Ley Hipotecaria— y que, de acuerdo con los artículos 18 de esta última Ley y 33 del Reglamento Hipotecario, en la calificación se han de tener la copia del testamento y los demás documentos complementarios, y que en la jurisprudencia del Centro directivo que ha examinado —y cita— sobre ratificación de documentos privados celebrados por el causante se observa que se habían presentado esos documentos, aparte de que la Resolución de 15 de enero de 1960 que cita el recurrente sienta una doctrina contraria a la que afirma.

## V

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco desestima el recurso en Auto de 9 de julio de 1991 al entender necesario la presentación de los documentos pedidos en la nota de calificación, todo ello en base al artículo 18 de la Ley Hipotecaria y 33 de su Reglamento.

## Fundamentos de derecho

Vistos los artículos 14 de la Ley Hipotecaria, 76 y 78 del Reglamento para su ejecución, 255 del Reglamento Notarial y la Resolución de 15 de enero de 1960.

1. En el presente recurso se trata de la inscripción de una escritura de elevación a público de un contrato de compraventa en donde por haber fallecido el causante comparecen al otorgamiento los tres hijos como herederos del difunto que ratifican la venta hecha anteriormente por su padre.

2. La cuestión surge en cuanto a la forma de justificar esa cualidad de herederos. Para ello hay que tener en cuenta que el título que se pretende inscribir es un documento privado de compraventa —título material— elevado a escritura pública —título formal—. No se trata, por tanto, y en eso se distingue del contenido de la Resolución de 15 de enero de 1960, de la inscripción de las operaciones hereditarias —Resolución citada por Notario y Registrador en sus respectivos escritos— en la que el testamento, junto con la escritura particional, constituyen el título formal y material de la inscripción, y por eso se declaró por este Centro en esa ocasión que era necesario insertar en la escritura el testamento o acompañarlo a la misma, no así respecto de los certificados de defunción y últimas voluntades que bastaban estuvieran relacionados bajo la fe del Notario.

3. En este caso, por el contrario, hay que entender que la cualidad de heredero queda sobradamente demostrada con el testimonio en relación hecho por el Notario autorizante de conformidad con lo prescrito en el artículo 255 del Reglamento Notarial, que le permite insertar o relacionar en las escrituras que autorice cualquier documento que se halle en su protocolo, y siempre refiriéndose a la correspondiente matriz o documento protocolado, a la vez que manifiesta que lo inserto o relacionado se halla conforme con el original, lo que sucede en este caso en donde al importar sólo justificar, tal como se ha indicado en el apartado anterior, la cualidad en que intervienen los tres hermanos comparecientes —uno de ellos representado debidamente— como herederos del vendedor fallecido, se acredita esta circunstancia por lo que resulta de la escritura de aceptación de herencia autorizada por el propio fedatario, y que aparece testimoniada en la escritura calificada.

Esta Dirección General ha acordado revocar el auto apelado y la nota del Registrador.

Madrid, 29 de septiembre de 1993.—El Director general, Julio Burdiel Hernández.

Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

**25737** RESOLUCION de 8 de octubre de 1993, de la Dirección General de Administración Penitenciaria, por la que se da cumplimiento al despacho de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección quinta) de la Audiencia Nacional, en relación al recurso contencioso-administrativo número 5/1029/1993, interpuesto por don Juan Manuel Claudios Domínguez.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección quinta) de la Audiencia Nacional, se ha interpuesto por don Juan Manuel Claudios Domínguez, recurso contencioso-administrativo número 5/1029/1993, contra respectivas resoluciones de 20 de agosto, del Secretario general de Asuntos Penitenciarios, por la que se desestima su pretensión de que le sean concedidos quince días no disfrutados en concepto de plazo posesorio.

En su virtud, esta Dirección General, en cumplimiento de despacho de la antecitada Sala, lo pone en conocimiento de los posibles interesados, por si a sus derechos conviniera la personación, en forma, en el plazo de nueve días, a partir del emplazamiento, en el referido recurso contencioso-administrativo.

Madrid, 8 de octubre de 1993.—El Director general de Administración Penitenciaria, Pedro Pablo Mansilla Izquierdo.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal.

**25738** RESOLUCION de 13 de octubre de 1993, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se fija el plazo de un año para la reconstrucción del folio desaparecido en el Registro de Madrid número 22.

Vista la comunicación del Registrador de la Propiedad de Madrid número 22 en que da cuenta de la desaparición —por causas ignoradas— del folio número 164 del libro 703; y

Teniendo en cuenta que por el señor Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha sido remitida copia del acta de la visita de inspección practicada al efecto en el expresado Registro por la señora Magistrada-Jueza Decana de los de Madrid,

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.º de la Ley de 5 de julio de 1938, ha acordado fijar el día 25 de octubre de 1993, a partir del cual comenzará a correr el plazo de un año para la reconstrucción en forma ordinaria del folio desaparecido del Registro de la Propiedad de Madrid número 22.

Lo que digo a V. E. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 13 de octubre de 1993.—El Director general, Julio Burdiel Hernández.

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia. Madrid.

## MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

**25739** ORDEN de 2 de septiembre de 1993 por la que se conceden los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, y en la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, a la Empresa «Granja El Señorío de Molina, Sociedad Anónima Laboral».

Vista la instancia formulada por la Entidad «Granja El Señorío de Molina, Sociedad Anónima Laboral», con número de identificación fiscal A-19.137.322, en solicitud de concesión de los beneficios fiscales previstos en la Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales («Boletín Oficial del Estado» del 30) y en la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» del 17), y

Resultando que en la tramitación del expediente se han observado las disposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos establece el Real Decreto 2696/1986, de 19 de diciembre, sobre tramitación de la concesión de beneficios tributarios a las Sociedades anónimas laborales,